

Inflación, política económica y sistema político

MARIN MAYDON GARZA

Referirse a la inflación como un aumento generalizado de precios podría parecer impreciso si se tratara de una situación hipotética poco conocida. En el caso de vivir en un ambiente inflacionario concreto, como el actual de México, la propia presión del fenómeno enseña lo que éste significa.

Los consumidores afectados por una baja del poder de compra de sus presupuestos familiares contribuyen a caracterizar el fenómeno inflacionario como un problema político; sus reacciones no se limitan a un distinto comportamiento en el mercado, de acuerdo con sus ingresos y con los nuevos precios, sino que se extienden al campo de las presiones políticas con el fin de defender sus posiciones de bienestar. La importancia de la inflación como problema político se relaciona también con el hecho de que la política antiinflacionaria tiene que ser aplicada

a través del sistema político con que cuenta el país; en éste, las decisiones están sujetas a las presiones tanto de los afectados por la inflación como de los que pueden verse perjudicados por las diversas medidas para combatirla.

Para observar la magnitud del problema inflacionario es necesario considerar las diversas manifestaciones de un proceso político de respuesta a la inflación, ya que dicha magnitud puede no ser detectada adecuadamente por los índices generales de precios. Con frecuencia estos índices se elaboran atendiendo a diversos sistemas de ponderación de los movimientos de precios en la economía, sin reflejar la importancia de las repercusiones sociopolíticas asociadas a dichos movimientos. Por eso no siempre son útiles para definir la magnitud del proceso inflacionario como problema político. Así, por ejemplo, el comportamiento de los precios de ciertos alimentos puede ser suficiente para desarrollar expectativas inflacionarias e impulsar protestas contra la inflación en general, aun cuando los índices generales de precios no se incrementen con gran fuerza. En la situación actual se puede observar la importancia del fenómeno

Nota: Una versión preliminar de este trabajo se presentó en el "Segundo Seminario sobre el Estudio de los Problemas de la Inflación en México", Instituto de Estudios Políticos, Sociales y Económicos, México, D. F., noviembre 9 de 1973.

inflacionario tanto en el campo político como en el comportamiento de los índices generales de precios.¹

A pesar de que un alza generalizada de precios es fácil de percibir, la explicación del proceso que la ha desatado y, más aún, la evaluación de las posibilidades de controlarla, se enfrentan a grandes dificultades. A las complejas interrelaciones de las distintas variables económicas hay que agregar su interdependencia con las situaciones políticas. Con esta perspectiva, limitarse a examinar el problema exclusivamente en términos del análisis tradicional de oferta y demanda globales resulta poco satisfactorio.

No habría por qué desesperarse por suprimir la inflación si se contara con instrumentos adecuados para anular, a un costo socialmente aceptable, sus efectos no deseados. Inclinarse por buscar su eliminación implica, en buena parte, un reconocimiento de las dificultades para controlar sus resultados. El problema central de una tendencia hacia una distribución más injusta del ingreso, provocada por el proceso inflacionario, representa un conjunto de acentuados conflictos sociales que difícilmente pueden solucionarse en medio de las presiones de precios, y sin restarle continuidad al desarrollo, si no se cuenta con mecanismos de decisión política claramente aceptados como identificadores de los deseos de la sociedad. Los efectos negativos sobre la distribución del ingreso podrían eliminarse, en principio, introduciendo reformas al sistema impositivo, modificando los salarios, etc. Sin embargo, sin un sistema político eficaz, la implantación de las medidas necesarias se vería probablemente obstaculizada en un ambiente de costosas fricciones sociales.

Puede parecer extraño no concretarse a hablar de las medidas de política económica en un trabajo sobre la inflación, pero aunque éstas vayan a ocupar la mayor parte del espacio conviene reconocer desde el principio que su viabilidad se encuentra condicionada por el tipo de sistema de decisiones políticas del país. El perfeccionamiento del sistema democrático irá presentando una nueva gama de soluciones viables a los distintos problemas sociales, incluyendo el del deterioro en la forma de la distribución del ingreso acarreado por el mecanismo inflacionario.

Sea por un reconocimiento de las dificultades para controlar los efectos adversos de la inflación, sea por la conveniencia de sujetar el fenómeno general inflacionario, y no cada una de sus manifestaciones, el interés por su control conduce a examinar sus causas; sin embargo, debe advertirse que su identificación no cubre todo el terreno que es conveniente considerar para concebir una política antiinflacionaria. La razón estriba, por un lado, en que existen causas del problema que no es posible atacar directamente en el caso de un país como México, como las de origen externo; por otro, en que puede resultar más eficaz combatir la inflación dirigiéndose no a su causa directa o

inicial, sino a los factores que le dan, por así decirlo, permiso para desenvolverse y que pueden, al contrario, convertirse en elementos que la restrinjan y acaben por sofocarla. Así, por ejemplo, una determinada política fiscal y monetaria puede "permitir" en mayor o en menor grado la operación de los factores inflacionarios de origen externo, sin que por ello sea el elemento inicialmente causante de la situación. De manera similar, una estructura de mercado con alto contenido monopolístico resulta un ambiente muy favorable para el desarrollo del proceso inflacionario a pesar de que dicha estructura no siempre pueda señalarse como el primer eslabón en la cadena del aumento de precios.

La identificación de la causa original de la inflación o de los factores que la "permiten" no basta para eliminarla, aun si con ello se hace posible el señalamiento de un culpable. Desde el punto de vista operativo interesa la capacidad para actuar sobre las causas iniciales del fenómeno, o sobre los factores que lo pueden dominar; la condena moral de los culpables no siempre es suficiente, aunque ciertamente puede servir para condicionar su actuación, al activarse mecanismos de presión política.

En general, es posible encontrar medios para controlar la inflación, independientemente del ataque directo a la causa original, o independientemente de la eliminación o modificación definitiva de todos los elementos o estructuras que en distintos grados le permiten desenvolverse.

La política antiinflacionaria no debe plantearse en términos de la erradicación de la inflación; hacerlo implicaría aceptar de antemano que se desea pagar cualquier costo con tal de no experimentar el fenómeno. Más bien, esa política tiene que examinarse en un contexto de moderación que permita equilibrar los distintos efectos del alza de precios, así como su grado de intensidad, con las consecuencias de la aplicación de diversas medidas. Difícilmente se podrá recomendar la eliminación absoluta de la inflación a costa de un bajo ritmo de crecimiento de la economía y del nivel de empleo, o a costa de sacrificar los programas sociales del gasto público. A la larga sería insostenible una política que para controlar los precios permitiera importaciones ilimitadas y suprimiera completamente las exportaciones porque no habría forma de financiar el déficit de la balanza de pagos. Tampoco sería recomendable buscar el freno al incremento de los precios de los alimentos, basando la expansión de su oferta en una mecanización generalizada del campo, ya que dicha política disminuiría las posibilidades de empleo a un grado que difícilmente podría compensarse con un crecimiento más acelerado del sector agropecuario. Distintas medidas tendrán diferentes costos sociales y éstos no siempre serán menores que los de aceptar cierto grado de inflación. Las acciones aceptables en algunos países no tienen por qué aceptarse en México.

El alto grado de interdependencia de las distintas variables socioeconómicas aparece a los ojos de quien examina el fenómeno inflacionario como la pérdida de todo punto de referencia que permita definir la importancia absoluta de los distintos medios de una política antiinflacionaria. Un determinado nivel de gasto público puede o no resultar inflacionario, dependiendo del comportamiento de otras variables. De la misma manera, los elementos monopolísticos en la estructura de mercado pueden coexistir con una relativa estabilidad de precios, como se observó en México durante el decenio pasado, o bien desempeñar el papel de mecanismos de propagación de los incrementos de precios. Con esto en mente, debe ser útil examinar los

¹ Por ejemplo, el crecimiento de 29.2% del índice de precios al mayoreo en la ciudad de México entre abril de 1973 y abril de 1974 es considerablemente mayor que los incrementos registrados en los períodos correspondientes de los años anteriores, 10.1% para 1972-73 y sólo 1.6% para 1971-72. Similarmente, el índice de precios al consumidor en la ciudad de México se incrementó 22.8% de abril de 1973 a abril de 1974 y 7.6% en el período correspondiente a 1972-73 y 5.2% en el de 1971-72. Aunque la comparación de los incrementos recientes se refiere a un período que, abarcando 1971 y 1972, fue de baja actividad económica, la referencia a las tendencias del decenio anterior arrojaría la misma conclusión respecto a lo fuerte de dichos incrementos.

diversos factores propiciadores de la inflación buscando su importancia relativa y su capacidad potencial para generarla y permitirla con variados efectos, o para restringirla, sin pretender a toda costa encontrarle un origen único.

En el resto del trabajo se examinan diversos aspectos generales de la inflación, sin hacer una presentación exhaustiva ni detallada. Aunque el examen se centrará en el comportamiento de los mercados de bienes y servicios, conviene tener presente que lo que en ellos pasa está conectado con lo que sucede en otros. En particular, los mercados de activos financieros, en los que se incluye el dinero, están estrechamente ligados a los mercados de bienes y servicios. Así, un incremento general de precios, observable en los mercados de bienes y servicios, puede tener su apoyo en una disminución de la importancia relativa del dinero deseada por los consumidores (lado de la demanda) o en un incremento de la oferta de circulante propiciado por las autoridades monetarias. (Véase la sección correspondiente a la oferta y demanda globales.)

En orden de presentación, se tocarán temas relacionados con el mercado internacional, la oferta y demanda globales, los elementos monopolísticos de la estructura económica, la composición de la oferta y la demanda y, para terminar, los mecanismos de redistribución del ingreso y el sistema político. Se hará hincapié en los orígenes de la inflación, sus procesos de propagación y las medidas para contrarrestarla; con respecto a sus efectos y a los mecanismos de distribución del ingreso, se señalarán las dificultades del sistema político para aplicar medidas de política económica que afectan a diversos individuos o sectores de la economía. Debe tomarse en cuenta que al poner la mayor atención en los temas señalados se han dejado a un lado otros aspectos generales de la inflación tales como algunos de los relacionados con sus efectos sobre el comportamiento de la economía (ritmo de crecimiento, inversión, etcétera).

RELACIONES CON EL MERCADO INTERNACIONAL

Normalmente, cuando las causas principales de la inflación son internas, las relaciones con el mercado internacional pueden facilitar, por medio de las importaciones, el amortiguamiento de las presiones inflacionarias. Por lo contrario, cuando el mercado internacional presenta tendencias inflacionarias, las importaciones sirven para transmitir las al mercado interno. Sin embargo, aun en este caso, las compras externas quizá contribuyen a moderar la inflación si los niveles de precios de algunos bienes del exterior, a pesar de su crecimiento, se mantienen por debajo de los del país, y por tanto son recomendables como un instrumento antiinflacionario de utilidad temporal.

El mercado internacional ha venido mostrando inclinaciones inflacionarias desde hace algún tiempo, pero recientemente éstas se han visto fortalecidas, entre otras causas, por la gran cantidad de dólares que circulan por un mundo que no los demanda en su totalidad, a lo que se agregan problemas espaciales en el mercado de productos agropecuarios y en el de energéticos.

Independientemente de la comprensión del proceso inflacionario mundial, es importante reconocer que en la práctica México no puede hacer nada para remediarlo. En cambio sí es dable aislar, eliminar o compensar los efectos sufridos por el país.

Como ya se mencionó, en la presente situación inflacionaria mundial las importaciones no son el único mecanismo de transmisión de la inflación. En la medida en que el mercado interno está integrado al internacional, el incremento de precios también se trasmite por medio de las exportaciones, ya que el consumidor nacional tiene que competir con los precios que paga el del exterior y que resultan muy atractivos para el productor interno. La eliminación de las exportaciones aliviaría las presiones sobre los precios internos, pero ésta no podría convertirse en una política generalizada a todos los bienes por un largo tiempo. Las necesidades de importaciones no podrían sostenerse indefinidamente a base del crédito externo; tampoco sería recomendable no aprovechar la ventaja comparativa del país en la exportación de ciertos bienes porque se estarían desconociendo los beneficios del comercio internacional. A este respecto sólo podría aceptarse un reducido número de excepciones, siempre y cuando fueran por tiempo corto o permitieran la comprobación de que el país tiene o no ventaja comparativa de exportación en los rubros correspondientes.

OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Con toda seguridad, aun quien proclama no entender a los economistas sabe que el aumento de la demanda de un producto presiona para que su precio aumente y que una menor disponibilidad en su oferta provoca el mismo fenómeno. Si las demandas de todos los bienes tienden a crecer, o sus ofertas a restringirse, se experimentará un alza generalizada de precios o un fenómeno inflacionario.

La referencia a la oferta y demanda globales no apoya su validez en la verdadera existencia de un solo tipo de demanda y un solo tipo de oferta. Más bien, su pertinencia se deriva de que aun cuando se reconoce que existe una infinidad de bienes y servicios cuyos precios son determinados por sus respectivas ofertas y demandas, existen factores de tipo general que pueden ser identificados como el común denominador del comportamiento de las demandas u ofertas de cada uno de los distintos bienes y servicios intercambiados en la economía independientemente de que existan factores específicos que afecten a algunos bienes en un sentido incluso contrario al de los factores de tipo general.

Considerando tanto la oferta como la demanda globales, cabe afirmar que un gobierno puede regular con mayor eficacia y rapidez la demanda global que la producción en el lado de la oferta. Es relativamente más fácil movilizar poder de compra para influir en la demanda global que expandir la capacidad productiva para mover a la oferta, ya que lo último requiere por lo general un proceso de inversión que toma tiempo en rendir sus frutos. Sin embargo, al no poderse actuar inmediatamente sobre la producción, las importaciones son un dispositivo eficaz para incrementar la oferta global.

El Estado dispone de diversos medios para movilizar poder de compra que puede servir para reforzar o contrarrestar el canalizado por los individuos o empresas. Como estos últimos se pueden comportar de muy distintas maneras, el mismo tipo de acción por parte del Gobierno no siempre tendrá las mismas repercusiones sobre la demanda global; sin embargo, siempre será posible actuar sobre la demanda global, determinando distintos niveles de gasto público, ingresos fiscales, déficit

gubernamental, oferta monetaria y disponibilidades de crédito para el sector privado.

En México el Gobierno ha incrementado sustancialmente el gasto público cuando existieron expectativas de una baja actividad por parte de los inversionistas privados y de un bajo crecimiento del producto, aumentándose la demanda global y logrando una recuperación de la actividad económica como la de 1972. Ante una situación inflacionaria, cuanto mayor sea el incremento relativo del gasto público no compensado suficientemente con una reducción del poder de compra en manos de los particulares, ya sea a través del sistema crediticio o del sistema fiscal, tanto mayor será la presión para que el alza general de precios continúe. Los fuertes aumentos del medio circulante que sirvieron para la recuperación económica de 1972, y que se han extendido hasta 1973 y 1974, han facilitado el desenvolvimiento de la inflación.

Una política de control de la demanda agregada que se formule de manera tradicional con base en medidas relacionadas con la fijación de un nivel limitado de gasto público y restricciones en el crédito interno al sector privado, puede tener resultados poco satisfactorios. Una razón para ello es que el sector privado quizá logre niveles elevados de gasto con base en el crédito externo y a pesar de las restricciones crediticias, que repercutan en incrementos de la oferta monetaria más allá de lo planeado por las autoridades financieras; todo esto significa una pérdida del control de la demanda agregada por parte de dichas autoridades, a menos que se tomen medidas adicionales.²

Por lo general, los indicadores tradicionales de la forma en que el Gobierno está fortaleciendo o compensando la movilización de poder de compra de los individuos o empresas no tienen importancia en términos absolutos. Un determinado nivel del déficit gubernamental o del gasto público podrá resultar inflacionario para una situación de la economía y para otra no serlo. Igualmente, acaso cierto nivel de la oferta monetaria no se considere inflacionario, pero si los demandantes movilizan los medios de pagos con una mayor rapidez, el mismo permite que se desenvuelva la inflación. Un nivel dado de gasto público puede estar asociado a distintos niveles de déficit, ya que los esfuerzos por el lado de los ingresos pueden ser diversos. También, un mismo nivel de déficit público puede basarse en mayor o menor grado en la transferencia de poder de compra del sector privado al público por medio del sistema financiero, o apoyarse en la expansión del medio circulante sin absorber directamente el poder de compra del público. En los distintos casos, el que los resultados sean o no inflacionarios depende de cómo queden compensadas las corrientes de poder adquisitivo. La situación se complica todavía más porque una vez que las expectativas inflacionarias se arraigan, los demandantes de medios de pago tratan de deshacerse de ellos lo más pronto posible antes de que el dinero pierda más valor, continuando, en consecuencia, la alimentación del proceso de alza de precios. Por más compleja que parezca la exposición del problema, debe quedar claro que no conviene poner toda la atención en uno solo de sus elementos descuidando sus interrelaciones con los demás.

² Esta posibilidad es especialmente relevante para entender la extensión del fenómeno inflacionario en 1974, año para el que se planeó un gasto público restringido y limitaciones en el crédito interno.

Ante los distintos efectos de las acciones del Gobierno, según sea el comportamiento de los individuos y las empresas, no cabe apreciar su repercusión final en forma aislada. Es preciso sumar tanto las acciones del Estado como las del sector privado para definir el efecto de las medidas que habrán de adoptarse; para esto se requiere contar con información oportuna. En México es difícil conocer a tiempo el gasto público efectivo; aún más difícil resulta obtener la información de los componentes de la demanda global que corresponden al consumo y la inversión privada. Los esfuerzos encaminados a resolver este problema de información están más que justificados. Debido a que existe un tiempo de espera, generalmente no determinado, entre la aplicación de medidas y su efecto sobre la economía y el nivel de precios, la oportunidad de ellas estará condicionada no sólo por la calidad de la información sino por la frecuencia con que se obtenga.

En la situación actual de México, la restricción de la demanda global es una opción antiinflacionaria, pero debe recordarse que dicha limitación puede lograrse de diversas maneras, que a su vez representan otras opciones dentro de las cuales se pueden distinguir la actuación sobre el gasto público, el sistema impositivo y la canalización del crédito por el sistema bancario. También debe notarse que asegurar el control de dicha demanda no representa una tarea sencilla.

Aunque la demanda agregada pueda manejarse con relativa eficacia para controlar la inflación, el resultado final dependerá del nivel de la oferta agregada, sobre cuyo componente de producción interna no es posible actuar con la misma rapidez. El nivel de oferta agregada depende en gran medida de las inversiones realizadas tiempo atrás, y las nuevas inversiones por lo general no incrementan la oferta sino hasta después de un período de maduración relativamente largo. Los propios incrementos en la demanda global tienden a estimular la inversión y la producción, tarde o temprano, pero la respuesta puede retrasarse demasiado. Quizá un ambiente de incertidumbre económica y política mantenga la inversión privada a un ritmo lento, con serias consecuencias sobre la oferta global y sobre el nivel de precios. Existen indicios de que la inversión privada no ha venido alimentado adecuadamente la capacidad productiva del país en los últimos años.³

Antes de seguir adelante con el examen de los distintos aspectos de la inflación, debe insistirse en que la aplicación real de los diferentes instrumentos de política económica disponibles no depende exclusivamente de la evaluación de su capacidad potencial para controlarla. La acción sobre el nivel del gasto público, del déficit, o de los ingresos fiscales, etc., estará afectada por los diversos conflictos sociales y políticos que determinan su viabilidad y en los que la inflación es sólo un elemento de juego.

ELEMENTOS MONOPOLISTICOS EN LA ECONOMIA

Durante el decenio pasado fue posible observar a la economía mexicana, plagada de elementos monopolísticos, desarrollarse

³ Recientemente la inversión privada ha mostrado un mayor dinamismo.

sin inflación; sin embargo, tal observación no constituye una prueba de que una estructura monopolística de los mercados no patrocina ni "permite" su desencadenamiento.

La característica principal de los precios en un mercado donde no rige la competencia es que el vendedor, o un reducido número de vendedores, tienen un alto grado de influencia sobre ellos. Aunque este poder no significa que los precios suban ilimitadamente, puesto que la demanda efectiva les impondría una situación extrema de cero ventas y grandes pérdidas, la ausencia de competencia permite a los vendedores experimentar con los precios y determinar los que más les convienen desde el punto de vista de sus utilidades.

Cuando el vendedor tiene el poder absoluto del monopolio, lo más probable es que sin dificultad encuentre rápidamente el precio que lo pone en la mejor situación. Sin embargo, aun cuando en México existen fuertes elementos monopolísticos, éstos se ven atenuados en la medida en que existe la posibilidad de tener que enfrentar la competencia de vendedores del exterior. Estas circunstancias, aunadas a las expectativas de generar repercusiones políticas adversas que obliguen al Gobierno a tomar medidas para controlar los precios, permitir mayores importaciones, etc., hacen que no siempre sea fácil para los vendedores alcanzar los precios que les permitirían un incremento inmediato en sus ganancias. Así, es posible que al final de un largo período de relativa estabilidad en el nivel de precios, los vendedores se encuentren con que no le están sacando el máximo provecho a la demanda efectiva en el mercado y que una elevación de precios fortalecería sus utilidades. De lograrse un movimiento simultáneo en la mayor parte de los vendedores que cubren el mercado, disminuyen las posibilidades de que unos hagan la competencia a los otros disipándose también sus riesgos políticos, ya que se dificulta la identificación de los responsables del fenómeno y el problema se vuelve de tipo general, cubriéndose por el ruido de la máquina inflacionaria que lo mismo se apoya en la estructura monopolística del mercado, se nutre de las presiones inflacionarias externas, o se deriva de otros fenómenos. De la misma manera que en el caso de un monopolio, la acción concertada de los vendedores no los puede llevar a un incremento ilimitado de los precios. La demanda efectiva en el mercado es una restricción que al final de cuentas se tiene que hacer sentir. Puede darse el caso de que al generarse la carrera de alza de precios se les "pase la mano" y que el enfrentarse a un mercado limitado, cuya demanda global es controlada con eficacia por el Gobierno, los precios tengan que ser rectificadas hacia abajo o que, por lo menos, su crecimiento se vea desacelerado.

Las consideraciones anteriores indican que los vendedores no siempre explotan plenamente su poder monopolístico y que existen oportunidades para hacerlo. Estas pueden aparecer porque se registra un cambio en la demanda (elasticidad) dirigida a los vendedores nacionales, por ejemplo, al reducirse la competencia de los vendedores del exterior, o porque se propicia la cohesión o colusión de vendedores para actuar en conjunto como monopolio (acaso la colusión sea implícita y no requiera una asociación explícita de vendedores).⁴

⁴ Un problema de interés analítico es el de si es posible que en una economía plagada de oportunidades para aprovechar ventajas de tipo monopolístico, todos los vendedores puedan conseguir mayores precios y

Son varios los elementos que en distinto grado facilitaron el aprovechamiento de ventajas monopolísticas por los vendedores al principio de la actual situación inflacionaria, sirviéndoles de base para una acción concertada. Algunos de ellos se presentaron directamente como incrementos de costos, pero también funcionaron factores propiciadores de diversos tipos de expectativas relacionadas tanto con los costos como con la demanda.⁵

Debe advertirse que si bien los diversos incrementos de costos pueden servir de base para aprovechar ventajas monopolísticas, no debe confundirse este proceso con una explicación de la inflación fundada en la tradicional teoría de las "presiones de costos" (*cost-push inflation*) y su efecto *directo* sobre la oferta de bienes. No es éste el caso. Aun a riesgo de un exceso de repetición, debe aclararse que lo que se está señalando es que ciertos movimientos en los costos quizá propicien cambios en la *organización del mercado*, al reducirse la competencia y actuar los vendedores coludidamente en sus políticas de precios. Por otro lado, no debe pasar desapercibido que las tendencias a incrementos de precios en los mercados internacionales no sólo se pueden ver en el mismo plano que ciertos cambios de costos, es decir, como excusas públicas para una acción concertada de vendedores, sino que representan cambios en las demandas (elasticidad) dirigidas a los vendedores nacionales y mayores oportunidades de que su acción coordinada les rinda beneficios de tipo monopolístico.

Un factor que hace todavía más graves las consecuencias de la existencia de mercados de tipo monopolístico es que en sectores muy importantes, como el agropecuario, el poder monopolístico es mayor al nivel de los que comercializan los productos que al nivel del productor. En este caso, los incrementos de precios que paga el consumidor no se traducen en un estímulo significativo para el productor, puesto que en buena medida son absorbidos en forma de ganancias de los intermediarios. Este alto grado relativo de poder monopolístico en el ámbito de la comercialización debe atacarse aumentando la competencia, sin que se trate de eliminar la función de interme-

generalizar su alza. ¿Se trata más bien de que sólo unos cuantos de los monopolistas o de los grupos de vendedores coludidos pueden incrementar sus precios, pero que no todos lo logran al mismo tiempo? Es posible que en todos los mercados se incrementen los precios, aun si las autoridades no han tomado medidas que eleven la demanda global y aun si la oferta monetaria no ha sido aumentada. El alza general de precios puede financiarse, al verse los individuos restringidos a sus presupuestos o riquezas, vía disminuciones en las cantidades compradas de bienes o por medio de reajustes en sus disponibilidades de activos. En particular, si el comportamiento monopolístico de los vendedores desata expectativas inflacionarias, es más probable que el incremento de precios sea financiado con una disminución en la importancia relativa de lo que los individuos demandan de dinero para sus disponibilidades de activos. Si paralelamente a las acciones de tipo monopolístico las autoridades incrementan la demanda global, el origen de la inflación será doble.

⁵ Dentro de los factores importantes se encuentran el aumento a la tasa del impuesto sobre ventas (ingresos mercantiles) a principios de 1973, la diseminación de expectativas de inflación derivadas de la política gubernamental que llevó a la recuperación económica de 1972, y las tendencias a incrementos de precios en los mercados internacionales que todavía continúan presentándose y reducen las posibilidades de una fuerte competencia del exterior. Una vez que existe un ascenso inicial en el nivel de precios, éste constituye una guía para que todo mundo trate de elevar sus precios. También, la expectativa de mayores costos de mano de obra derivados de la posible implantación de la semana de 40 horas sirvió de bandera para la unificación por el aumento de precios; lo mismo que el establecimiento de contribuciones para el programa de vivienda, y otro tipo de medidas del mismo carácter.

diación, que no necesariamente tiene que ser realizada por los productores sino por unidades especializadas, con ventaja, en una actividad de gran importancia para la sociedad. Con referencia al transporte de mercancías en general, y en especial de productos agropecuarios, las tendencias adversas a la competencia favorecen utilidades monopolísticas que actúan en contra tanto de los consumidores como de los productores.

Tomando en cuenta que independientemente de que el mercado esté plagado de elementos monopolísticos, la demanda afectiva impone límites a los aumentos de precios; la regulación de la demanda global no debe descartarse como una opción antiinflacionaria, a la vez que se hacen esfuerzos para incrementar la competencia.

Ante la imposibilidad de cambiar radicalmente la estructura del mercado en el corto plazo, las importaciones pueden ejercer un efecto competitivo saludable, pero los beneficios se ven reducidos en el momento actual, porque sus precios también se encuentran en alza en los mercados internacionales. Aunque sólo cabe esperar resultados importantes en el largo plazo, debe buscarse el fortalecimiento del grado de competencia en los mercados mexicanos. Las medidas para facilitar el acceso al crédito y la tecnología de las nuevas empresas con posibilidades de operar eficientemente, el mejoramiento en la disponibilidad de información de mercado en manos de los consumidores, que tienen cierto costo pero también un alto beneficio social, y la reducción del proteccionismo para aplicar por lo menos parcialmente la presión de la competencia internacional, forman parte de los pasos que deben darse. En algunos casos, el Estado deberá establecer directamente nuevos centros de producción que incrementen la competencia.

COMPOSICION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

La consideración de los factores comunes que explican los movimientos de precios y que se expresan a través del concepto de oferta y demanda agregadas tiene que complementarse con el examen de los factores que afectan sólo a ciertos bienes en particular. Distinguir el caso de cada bien o servicio no es fácil; tampoco es indispensable. Sin embargo, así como se trata de encontrar un común denominador en la demanda global, conviene identificar los factores que sin tener dicha característica general representan un común denominador, parcial, en los movimientos de oferta o demanda de ciertos segmentos o sectores de la economía.

A través de la estructura del gasto público o de diversos instrumentos fiscales o crediticios, la demanda y oferta de unos sectores se puede mover con mayor rapidez o intensidad que las de otros, provocando presiones heterogéneas sobre los distintos precios.

Un mismo nivel global de gasto público tiene efectos muy distintos según su contenido. Con las expectativas acerca de los nuevos programas de vivienda y de los requerimientos de otros rubros del gasto, se desató en México una significativa presión de demanda sobre la industria de la construcción. Al mismo tiempo, con relación a la política de redistribución del ingreso, la mayor disponibilidad de poder de compra en más amplios segmentos de la población pone una presión especial sobre los requerimientos de bienes de consumo, en particular sobre los de

alimentos. En todos estos casos, se trata de cambios en la estructura de la demanda.

Ante las presiones especiales de la demanda sobre ciertos sectores, su oferta no responde con la misma rapidez y así se generan presiones inflacionarias. La estructura de la producción requiere cierto tiempo para ajustarse a los cambios en la demanda. En los sectores correspondientes a la industria, un incremento de precios resulta un estímulo poderoso para elevar, aunque tome algún tiempo, la capacidad productiva por medio de la inversión. En el sector agropecuario, la dinámica de la inversión es distinta y se tiene que confiar menos en que los aumentos de precios, por sí mismos, permitirán aumentar fuertemente la producción de productos agropecuarios. Este sector requiere mayor atención por medio de diversas políticas que deben complementar a la de precios. Además de las dificultades que tienen los distintos sectores para que sus ofertas respondan a los precios más elevados, apoyadas en la inversión, dicha respuesta depende también de las disponibilidades de insumos básicos. La oferta de ciertos sectores clave es fundamental para facilitar o restringir la oferta de otros que dependen de ellos en muy distintos grados. Una inadecuada disponibilidad de energéticos o de transportes de inmediato presiona al alza los precios de los bienes y servicios cuya producción sufre cuellos de botella.

Aparte de cuidar el abastecimiento de los bienes y servicios que tiene directamente en sus manos, el Estado debe implantar mecanismos de corrección relacionados con la estructura del gasto público. Un incremento desmesurado en los precios de cierto sector, como el de la construcción, debe servir como señal para regular la demanda respectiva. Independientemente del uso de medidas crediticias, entre otras, el Gobierno puede redistribuir el gasto público, disminuyéndolo en los rubros en que ejerce mayor presión sobre precios específicos y dirigiéndolo a otros que afecten menos al sector productivo donde se registran alzas de precios. Las acciones aisladas de distintas entidades del sector público que requieren un mismo tipo de bienes, como los de la construcción, deberían sumarse para registrar su efecto total sobre la demanda y para contrarrestar el poder monopolístico de los vendedores. El anuncio de que el Gobierno frenaría las compras, en caso de observar un aumento desproporcionado de los precios, serviría para desalentar las operaciones especulativas, al correrse mayores riesgos en ellas, y por tanto para reducir los márgenes de utilidades monopolísticas.

Al examinar la composición de la oferta y la demanda, debe considerarse que los movimientos de precios de diversa intensidad en distintos bienes, generan una nueva estructura de precios relativos. Actualmente es deseable que los precios de los productos agropecuarios se incrementen en mayor proporción que el de otros bienes, para estimular una mayor oferta de los primeros (los aspectos relacionados con la distribución del ingreso se mencionan más adelante). También es recomendable que los precios de algunos bienes y servicios que han estado subsidiados por medio de empresas públicas se aumenten en mayor proporción que los de otros bienes, en correspondencia con sus costos relativos para la sociedad. De esta forma se garantizaría un adecuado suministro en el largo plazo que evite posibles cuellos de botella en la producción nacional y la amenaza permanente de nuevas presiones inflacionarias. (Los precios de los energéticos han recibido ajustes recientemente.)

MECANISMOS DE REDISTRIBUCION DEL INGRESO Y EL SISTEMA POLITICO

Como parte final de este examen del problema inflacionario, a manera de conclusión se dirigirá la atención hacia el papel de los mecanismos de redistribución del ingreso dentro del sistema político nacional.

Indiscutiblemente, del reconocimiento de las consecuencias de la inflación sobre la distribución del ingreso se deriva la acalorada discusión pública del problema. No se trata de un debate frío respecto a la eficiencia económica y la inflación, o sobre esta última y el crecimiento económico.

Durante el proceso inflacionario, el incremento acelerado de las utilidades es un resultado prácticamente automático. No ocurre lo mismo con los salarios y otros ingresos relativamente fijos, que en el mismo proceso pierden poder adquisitivo. Al mismo tiempo, si el fenómeno inflacionario va acompañado de un auge en la actividad económica, puede generar un cierto beneficio para los desempleados que se encuentran con mayores oportunidades de empleo, aunque éstos sean de baja retribución. Todos estos movimientos en las disponibilidades relativas de poder de compra en manos de los diversos sectores de la población, repercuten en cambios sustanciales en la distribución del ingreso e impulsan la lucha política.

Diversos individuos y sectores reaccionan a la inflación, o a las consecuencias de las reacciones de los demás a ésta, para defender sus posiciones y mejorarlas. Los sindicatos tratan de defender los intereses de los trabajadores que ocupan, tanto aplicando los instrumentos sindicales en el mercado de trabajo, como utilizando mecanismos de presión política para que el Gobierno tome medidas de política económica que repercutan a su favor en dicho mercado y para que los apoye en las negociaciones con otros sectores. Los empresarios también intentan defender sus posiciones respecto a las utilidades no concretándose a actuar directamente en el mercado de trabajo, sino ejerciendo presiones en el sistema político. En esta área, el sector empresarial tiene como instrumentos de presión factores importantes que, si bien no afectan al mercado de trabajo o la economía en el corto plazo, pueden afectarlos en el largo plazo, como por ejemplo el posible comportamiento adverso de la inversión ante utilidades fuertemente reducidas. Por otro lado, los trabajadores no sindicalizados, cuyas oportunidades de empleo disminuyen porque los sindicatos obtienen elevados salarios o porque se toman medidas antiinflacionarias que conducen a una disminución en el ritmo de la actividad económica, no disponen de organización para presionar dentro del sistema político en forma eficaz y anticipada para defenderse del desempleo. No es difícil que ellos resulten perjudicados; sin embargo, acaso también opere en su favor el peso de consideraciones de largo plazo. Como desempleados representan una base de presión política que debe ser reconocida por los diversos sectores en pugna antes de decidir convertirlos en víctimas de la defensa de sus posiciones.

El ambiente inflacionario también trae consigo un reajuste en la estructura de precios que tiene efectos redistributivos adicionales a los identificados directamente con los movimientos del nivel general de precios. En la presente situación inflacionaria, en tanto los mayores incrementos de precios se concentren en los productos agropecuarios, se registrará un movimiento de precios relativos en favor del campo mexicano en contra de los

largamente favorecidos centros urbanos. De esta manera, la inflación tendrá un efecto benéfico sobre la distribución sectorial y regional del ingreso. Deberá buscarse que dicho efecto no se pierda. También debe insistirse en el ajuste continuo de los precios de las empresas públicas para evitar las ventas subsidiadas, que benefician principalmente a los sectores urbanos.

Tanto en relación a las posibilidades de contener la inflación en general, como con respecto a las de actuar sobre sus efectos, fortaleciendo los favorables y eliminando los no deseables, debe reconocerse que la gama de opciones va más allá de las relaciones entre los instrumentos de política económica y el propio funcionamiento del mercado, para incluir el campo de la negociación política como un elemento prácticamente indispensable. La corrección de los efectos negativos de la inflación sobre el poder de compra de los asalariados requiere negociaciones en las que el Gobierno tiene forma de favorecer la posición de los trabajadores aún más allá de la simple compensación de la pérdida de poder adquisitivo, afectando las utilidades de tipo monopolístico al tiempo que se toman medidas diversas, por ejemplo, sobre la demanda global, para evitar que la redistribución del ingreso en favor de los trabajadores se revierta, por medio de mayores precios, y se recuperen los niveles de las utilidades monopolísticas, en exceso de los correspondientes a una justa y eficiente retribución al capital. Debido a que al beneficiar a los trabajadores sindicalizados puede agravarse el problema del desempleo, la principal función del gobierno, en las negociaciones del tipo señalado, debe ser la de hacer compatible el avance en la posición de los trabajadores ocupados con el logro de niveles satisfactorios de inversión privada y, sobre todo, de creación de empleos.

Después de un cierto período de inflación, es probable que los vendedores estén explotando a su tope sus ventajas monopolísticas. De contarse con un adecuado control de la demanda global es probable que no tengan un gran margen para trasladar, en forma de precios aún más altos, los incrementos en los precios de los bienes y servicios de las empresas públicas.

Si no se encontrase una combinación eficaz de medidas de política económica y de resultados concretos de la negociación entre los distintos sectores de la sociedad, la lucha de éstos por mejorar su posición llevaría a un proceso en el cual lo único que quizá es dable predecir es la inflación y el acentuamiento de los conflictos sociales. Debe reconocerse que, al final de cuentas, las fuerzas inflacionarias que operan a través de mecanismos de mercado son la expresión de las tensiones sociales que el sistema político no ha sido capaz de aliviar y por las que es posible observar tendencias contradictorias que no pueden continuar indefinidamente, si es que se espera detener la inflación. Un mayor gasto público para atender las necesidades sociales sin un esfuerzo compensatorio eficaz para incrementar los ingresos públicos, o para reducir las disponibilidades de crédito interno y externo en manos de los consumidores e inversionistas, así como salarios crecientes sin medidas suficientes para contener la demanda global y limitar las utilidades de tipo monopolístico que permite el mercado, y otras condiciones, serían resultados visibles, paralelos a la inflación, de un sistema social en grave desequilibrio. Para detener permanentemente el proceso inflacionario, y no sólo por un corto tiempo, urge perfeccionar el sistema político mexicano de tal manera que aumente su capacidad para resolver las fricciones sociales, que pueden escapar cada vez más lejos de su campo de soluciones viables.